

No. 33947

**VENEZUELA
and
PORTUGAL**

Agreement on the reciprocal promotion and protection of investments (with protocol). Signed at Caracas on 17 June 1994

*Authentic text: Spanish and Portuguese.
Registered by Venezuela on 28 July 1997.*

**VENEZUELA
et
PORTUGAL**

Accord relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements (avec protocole). Signé à Caracas le 17 juin 1994

*Texte authentique : espagnol et portugais.
Enregistré par le Venezuela le 28 juillet 1997.*

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PORTUGUESA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCAS DE LAS INVERSIONES

El Gobierno de la República de Venezuela y el Gobierno de la República Portuguesa, en adelante denominadas las Partes Contratantes.

Animadas por el deseo de intensificar la cooperación económica entre los dos Estados, para el beneficio mutuo y de mantener condiciones justas y equitativas para la realización de inversiones por inversionistas de cada Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante.

Considerando que la promoción y protección reciproca de las inversiones contribuirán para la prosperidad económica de los dos Estados.

Han convenido lo siguiente:

ARTICULO I

Para los efectos del presente Acuerdo:

1.- El término "Inversionista" designa:

- a) La persona natural que de acuerdo a la legislación de la respectiva Parte Contratante, sean nacionales de esa Parte Contratante;
- b) Las personas jurídicas, incluyendo a las sociedades comerciales y otras sociedades o asociaciones, que tengan sede en una de las Partes Contratantes y estén constituidas y funcionen de acuerdo a la Ley de esa Parte Contratante.

2.- El término "Inversiones" comprende toda especie de bienes y derechos relacionados con inversiones hechas de acuerdo con la legislación de la otra Parte Contratante e incluye específica pero no exclusivamente:

- a) La propiedad de bienes muebles o inmuebles, así como cualesquiera otros derechos reales de goce o de garantía, inherentes o no a la propiedad de aquellos bienes, en especial hipotecas o prendas.
- b) Cuotas sociales y otras formas de participación en el capital o en los resultados económicos de las sociedades.

- c) Derechos de crédito relativos a sumas de dinero o a cualesquiera otra prestación con valor económico;
- d) Derechos de propiedad intelectual incluidos los derechos de autor y derechos de la propiedad industrial (tales como patentes, procesos técnicos, marcas de fábrica o de comercio, denominaciones comerciales, diseños industriales, así como Know-how, firma y nombre del establecimiento, prestigio y clientela);
- e) Concesiones de derecho público o privado, incluyendo concesiones de prospección, exploración y explotación de recursos naturales;

Ninguna modificación de la forma en la cual los bienes o derechos hayan sido invertidos o reinvertidos, afectará su calidad como inversiones; en concordancia con el presente Acuerdo a partir de las disposiciones legales pertinentes.

3.- El término "Territorio" designa el territorio de Cada Parte Contratante tal como se define en la respectiva legislación, sobre el cual esa Parte Contratante ejerce, de conformidad con el Derecho Internacional, soberanía, derecho soberano o jurisdicción.

4.- El término "Rendimientos" designa las cantidades generadas por una inversión, tales como ganancias y dividendos, intereses, regalías y otras formas de remuneración relacionadas con la inversión, incluyendo cualquier pago por asistencia técnica o de gestión.

5.- El término "Liquidación de la Inversiones" significa el cese de la inversión hecho de acuerdo con los procedimientos establecidos por la legislación vigente en el país en donde la inversión haya sido efectuada.

ARTICULO II

1.- Cada Parte Contratante promoverá, en su territorio, las inversiones realizadas por inversiones de la otra Parte Contratante y los admitirá de acuerdo con su legislación.

2.- Cada Parte Contratante protegerá, en su territorio, las inversiones efectuadas de conformidad con sus Leyes y Reglamentos por inversionistas de la otra Parte Contratante y se abstendrá de adoptar medidas arbitrarias o discriminatorias que impidan la administración, manufactura, utilización, usufructo, ampliación, enajenación y liquidación de sus inversiones.

ARTICULO III

1.- Cada Parte Contratante garantizará, en su territorio, un trato no discriminatorio, justo y equitativo conforme al Derecho Internacional a las inversiones realizadas por los inversionistas de la otra Parte Contratante.

2.- En las materias regidas por este Acuerdo, el trato al que se refiere el párrafo 1 de este Artículo no será menos favorable del que otorgue una Parte Contratante a las inversiones realizadas en su territorio, en condiciones semejantes por sus propios inversionistas o por los de un tercer país.

3.- Las disposiciones contenidas en los párrafos 1 y 2 de este Artículo no afectan el trato más favorable vigente o lo que sea concedido en el futuro por una Parte Contratante a inversiones de inversionistas de terceros Estados en virtud de:

- a) Participación en uniones aduaneras, zonas de libre comercio u otras formas similares de cooperación económica o Integración regional;**
- b) Acuerdos para evitar la doble tributación o cualquier otro instrumento en materia tributaria.**

ARTICULO IV

1.- Ninguna de las Partes Contratantes adoptará medidas que priven, directa o indirectamente, a los inversionistas de la otra Parte Contratante de las inversiones por ellos realizadas, salvo que se observen las siguientes condiciones:

- a) Que las medidas sean adoptadas por razones de utilidad pública o de interés nacional, en los términos de la legislación vigente;**
- b) Que las medidas no revistan carácter discriminatorio;**
- c) Que las medidas sean acompañadas de disposiciones que garanticen el pago de una indemnización inmediata, adecuada y efectiva; esta indemnización deberá tener por base el valor de mercado de las inversiones de que se trate en un momento inmediatamente anterior a aquel en que la medida fue hecha pública; la indemnización devengará intereses a la tasa de cambio aplicable en la fecha en que se haga efectiva la operación, en el territorio donde esté situada la inversión; la legalidad de las medidas referidas y el monto de la indemnización podrán someterse a revisión por medio del procedimiento legal aplicable.**

ARTICULO V

1.- Cada Parte Contratante, de conformidad con su legislación, garantiza a los inversionistas de la otra Parte Contratante la transferencia libre y sin demora, de las sumas relacionadas con las inversiones, en especial:

- a) Del capital y de las sumas adicionales para el mantenimiento o ampliación de la inversión;
- b) De los rendimientos,
- c) De las sumas necesarias para el servicio o pago de los préstamos, que ambas Partes hayan reconocido como inversiones;
- d) Del producto resultante de la liquidación o enajenación total o parcial de la inversión;
- e) De las indemnizaciones y otros pagos previstos en el Artículo IV del presente Acuerdo;
- f) De cualesquiera pago que deban efectuarse en virtud de la subrogación prevista en el Artículo VI del presente Acuerdo.

2.- A los efectos de este Artículo, se entenderá que una transferencia ha sido realizada "sin demora" cuando la misma sea realizada dentro del plazo normalmente necesario para el cumplimiento de las respectivas formalidades. El plazo se contará a partir del día en que la debida solicitud, acompañada de los documentos necesarios haya sido presentada, y no podrá en ningún caso excederse de un (1) mes.

ARTICULO VI

En el caso de que una de las Partes Contratantes o un ente por ella designado haya concedido un seguro contra riesgos no comerciales a inversiones realizadas por inversionistas de esa Parte Contratante en el territorio de la otra, y haya efectuado el pago correspondiente al seguro concedido, esta última Parte Contratante reconocerá a la primera la subrogación en todos los derechos titular original.

ARTICULO VII

1.- Las diferencias que surjan entre las Partes Contratantes en relación con la interpretación y aplicación del presente Acuerdo deberán ser, en la medida de lo posible, resueltas por la vía diplomática.

2.- En caso de que no se llegue a un entendimiento en un plazo de seis (6) meses a partir de la fecha de la notificación de la diferencia, cualquiera de las Partes Contratantes podrá someterla a un Tribunal de Arbitraje ad-hoc, de conformidad con las disposiciones de este Artículo.

3.- El Tribunal Arbitral se constituirá de la siguiente forma: dentro de un plazo de dos meses contando a partir de la fecha del recibo de la solicitud de arbitraje, cada Parte Contratante designará un árbitro. Esos dos árbitros a su vez escogerán como presidente un nacional de un tercer Estado. El Presidente deberá ser designado en un plazo de tres (3) meses contándose a partir de la fecha de designación de los otros dos árbitros.

4.- Si las designaciones necesarias no son hechas dentro de los plazos fijados en el párrafo tres de este artículo, cualquiera de las Partes Contratantes puede, a falta de acuerdo en otro sentido, solicitar al presidente de la Corte Internacional de Justicia que proceda a dichas designaciones. Si el Presidente tiene algún impedimento o es nacional de una de las Partes Contratantes, las designaciones serán hechas por el Vice-presidente. Si éste a su vez tiene algún impedimento o es nacional de una de las Partes Contratantes las designaciones serán hechas por el miembro de la Corte que siga en jerarquía y no sea nacional de cualquiera de las Partes Contratantes.

5.- El Presidente del Tribunal Arbitral deberá ser nacional de un Estado con el cual ambas Partes Contratantes mantengan relaciones diplomáticas.

6.- El Tribunal Arbitral decidirá con base en las disposiciones de este Acuerdo y las reglas y principios del Derecho Internacional. El Tribunal decidirá por mayoría de votos y sus decisiones serán definitivas y obligatorias para ambas Partes Contratantes. El Tribunal Arbitral determinará sus propias reglas procesales.

7.- Cada Parte Contratante sufragará los costos del respectivo árbitro así como lo relativo a su representación en el proceso arbitral. Los costos del Presidente y demás costos del proceso serán sufragados en partes iguales por las Partes Contratantes.

ARTICULO VIII

1.- Las diferencias respecto a la aplicación de este Acuerdo que surjan entre una de las Partes Contratantes y un inversionista de otra Parte Contratante, que haya realizado inversiones en el territorio de la primera serán, en la medida de lo posible solucionadas por medio de consultas amistosas.

2.- Si la diferencia no puede ser resuelta de forma amistosa dentro del plazo de seis (6) meses, contados a partir del inicio de esas consultas, podrá ser sometida, a elección del inversionista:

a) A los Tribunales locales de la Parte Contratante en cuyo territorio se efectuó la inversión; o

b) Al arbitraje del "Centro Internacional para Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones" (CIADI) establecidos por la Convención de Washington del 18 de marzo de 1965, en caso en que ambas Partes Contratantes sean parte de él, o, si fuere el caso, a las reglas que rigen el Mecanismo Complementario para la Administración de Procedimientos de Conciliación, Arbitraje y Comprobación de hechos por la Secretaría del CIADI. Si por cualquier motivo no estuviera disponible el CIADI ni el Mecanismo Complementario, el arbitraje se regirá por las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional (UNCITRAL).

3.- El Tribunal Arbitral decidirá con base en las disposiciones de este Acuerdo, de las reglas y principios del Derecho Internacional en la materia, en el derecho de la Parte Contratante en cuyo territorio se efectuó la inversión y en los términos de eventuales acuerdos particulares que se refieran a la inversión.

4.- Las sentencias arbitrales serán definitivas y obligatorias para las Partes en litigio y serán ejecutadas de conformidad con la Ley interna de la Parte Contratante en cuyo territorio se haya efectuado la inversión.

5.- En cualquier caso el laudo arbitral se limitará a determinar si la Parte Contratante de que se trate ha incumplido alguna obligación establecida en el presente Acuerdo si tal incumplimiento ha causado daño al inversionista y, en caso afirmativo, la suma que deberá pagar la Parte Contratante al inversionista como indemnización de ambos daños.

6.- Las Partes Contratantes se abstendrán de tratar, por medio de canales diplomáticos cuestiones relativas a diferencias sometidas a un proceso judicial o arbitraje internacional, hasta que los procesos correspondientes hayan sido concluidos, salvo en el caso de que una de las Partes en el diferendo no haya

cumplido la sentencia judicial o la decisión del Tribunal Arbitral, en los términos establecidos en la respectiva sentencia o decisión.

ARTICULO IX

Los representantes de las Partes Contratantes deberán, siempre que sea necesario, realizar reuniones sobre cualquier materia relacionada con la aplicación de este Acuerdo. Estas reuniones se realizarán a propuesta de cualquiera de las Partes Contratantes en el lugar y fecha que se acuerden por la vía diplomática.

ARTICULO X

Si las disposiciones de otro acuerdo internacional del cual sean parte o se hagan parte las dos Partes Contratantes, o las de la reglamentación interna de cualquiera de las Partes Contratantes establece un régimen más favorable que el previsto en el presente Acuerdo, prevalecerá sobre éste el régimen más favorable.

ARTICULO XI

1.- El presente Acuerdo se aplicará a todas las inversiones ya realizadas por los inversionistas de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante de conformidad con las respectivas disposiciones legales.

2.- El presente Acuerdo no se aplica a diferencias resultantes de hechos o actos ocurridos antes de su vigencia.

ARTICULO XII

1.- Cada Parte Contratante notificará a la otra Parte Contratante el cumplimiento de los respectivos requisitos constitucionales necesarios para la entrada en vigor de este Acuerdo, el cual se producirá treinta (30) días después de la fecha del recibo de la segunda notificación.

2.- El presente Acuerdo permanecerá en vigor por un período inicial de diez (10) años, vencido el cual se prorrogará tácitamente por períodos sucesivos de cinco (5) años.

3.- El presente Acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes Contratantes, mediante notificación por escrito dirigida por vía diplomática con no menos de un año de anticipación a la respectiva fecha de expiración.

4.- En caso de denuncia, las disposiciones previstas en los Artículos del 1 al 11 del presente Acuerdo continuarán aplicándose por un período de cinco (5) años, a todas las inversiones realizadas antes de su notificación.

Hecho en Caracas a los diecisiete días del mes de junio de mil novecientos noventa y cuatro, en dos ejemplares originales en idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por el Gobierno
de la República de Venezuela:



MIGUEL ANGEL BURELLI RIVAS
Ministro de Relaciones Exteriores

Por el Gobierno
de la República Portuguesa:



JOSÉ DURAO BARROSO
Ministro de Relaciones Exteriores

PROTOCOLO

En ocasión de la firma del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíprocas de las Inversiones entre la República de Venezuela y la República Portuguesa, los plenipotenciarios abajo firmantes han acordado adicionalmente las siguientes disposiciones que constituyen parte integrante del presente Acuerdo:

1.- En referencia del Artículo 2:

Cuando un inversionista de una de las Partes Contratantes haya efectuado inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante y desee ampliar o desarrollar actividades en otros sectores, esas inversiones serán consideradas como nuevas inversiones y por lo tanto estarán sujetas a las reglas sobre admisión de inversiones de conformidad al Artículo 2 de este Acuerdo.

2.- En referencia al Artículo 3:

Las Partes Contratantes consideran que las disposiciones del Artículo 3 de este Acuerdo no afectarán el derecho de cada Parte Contratante de aplicar las disposiciones pertinentes de sus leyes impositivas que distingan entre contribuyentes que no estén en la misma situación en lo que se refiere a su lugar de residencia o al lugar en el cual esté ubicada la inversión.

Hecho en Caracas, a los diecisiete días del mes de junio de mil novecientos noventa y cuatro, en dos ejemplares originales en idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por el Gobierno
de la República de Venezuela:

MIGUEL ANGEL BURELLI RIVAS
Ministro de Relaciones Exteriores

Por el Gobierno
de la República Portuguesa:

JOSÉ DURAO BARROSO
Ministro de Relaciones Exteriores

[PORTUGUESE TEXT — TEXTE PORTUGAIS]

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA PORTUGUESA E O GOVERNO DA REPÚBLICA DA VENEZUELA SOBRE A PROMOÇÃO E PROTECÇÃO MÚTUA DE INVESTIMENTOS

O Governo da República Portuguesa e o Governo da República da Venezuela, adiante designados como Partes Contratantes.

Animados do desejo de intensificar a cooperação económica entre os dois Estados, para benefício mútuo, e de manter condições justas e equitativas para a realização de investimentos pelos investidores de uma Parte Contratante no território da outra Parte Contratante.

Considerando que a promoção e protecção recíprocas desses investimentos contribuirão para a prosperidade económica dos dois Estados.

Acordam o seguinte:

ARTIGO 1º

Para efeitos do presente Acordo:

1. O termo "investidor" designa:

- a) as pessoas singulares que, de acordo com a legislação da respectiva Parte Contratante, sejam nacionais dessa Parte Contratante;
- b) as pessoas colectivas, incluindo sociedades comerciais ou outras sociedades ou associações, que tenham sede numa das Partes Contratantes e estejam constituídas e funcionem de acordo com a lei dessa Parte Contratante.

2. O termo "investimentos" compreende toda a espécie de bens e direitos, relacionados com investimento feito de acordo com a legislação da outra Parte Contratante, e inclui específica, mas não exclusivamente:

- a) A propriedade de bens móveis ou imóveis, bem como quaisquer outros direitos reais de gozo ou de garantia, inerentes ou não à propriedade daqueles bens, designadamente hipotecas e penhores;
- b) Partes sociais e outras formas de participação no capital ou nos resultados económicos das sociedades;
- c) Direitos de crédito relativos a numerário ou a quaisquer outras prestações com valor económico;
- d) Direitos de propriedade intelectual incluindo direitos de autor e direitos de propriedade industrial (tais como patentes, processos técnicos, marcas de fabrico ou de comércio, denominações comerciais, desenhos industriais, bem como know-how, firma e nome de estabelecimento, clientela e aviação);
- e) Concessões de direito público ou privado, incluindo concessões de prospeção, pesquisa, exploração de recursos naturais.

Nenhuma modificação da forma segundo a qual os bens e direitos tenham sido investidos ou reinvestidos afectará a sua qualificação como investimentos, em consonância com o presente Acordo, desde que observadas as disposições legais pertinentes.

3. O termo "território" designa o território de cada Parte Contratante, tal como definido na respectiva legislação, sobre o

qual essa Parte Contratante exerce, em conformidade com o direito internacional, soberania, direitos soberanos ou jurisdição.

4. O termo "rendimentos" designa as quantias geradas por um investimento, tais como lucros e dividendos, juros, "royalties" ou outras formas de remuneração relacionadas com o investimento, incluindo quaisquer pagamentos a título de assistência técnica ou de gestão.
5. O termo "liquidação do investimento" significa a cessação do investimento feita de acordo com os procedimentos estabelecidos pela legislação vigente no país em que o investimento em causa tenha sido efectuado.

ARTIGO 2º

1. Cada Parte Contratante promoverá, no seu território, os investimentos realizados por investidores da outra Parte Contratante, admitindo-os de acordo com a sua legislação.
2. Cada Parte Contratante protegerá, dentro do seu território, os investimentos efectuados em conformidade com as suas leis e regulamentos por investidores da outra Parte Contratante, abstendo-se de adoptar medidas arbitrárias e discriminatórias que impeçam a administração, manutenção, utilização, usufruto, ampliação, alienação e liquidação dos seus investimentos.

ARTIGO 3º

1. Cada Parte Contratante garantirá, no seu território, tratamento não discriminatório, justo e equitativo, conforme ao direito

internacional, aos investimentos realizados por investidores da outra Parte Contratante.

2. Nas matérias regidas por este Acordo, o tratamento referido no parágrafo primeiro deste Artigo não será menos favorável do que aquele outorgado por uma Parte Contratante aos investimentos realizados no seu território, em condições semelhantes, pelos seus próprios investidores ou por investidores de um terceiro país.
3. As disposições contidas nos parágrafos 1 e 2 deste Artigo não afectam o tratamento mais favorável vigente ou que venha a ser concedido pelas Partes Contratantes a investimentos de investidores de terceiros Estados em virtude de:
 - a) Participação em uniões aduaneiras, zonas de comércio livre ou outras formas similares de cooperação económica e integração regional;
 - b) Acordos para evitar a dupla tributação ou qualquer outro instrumento em matéria tributária.

ARTIGO 4º

1. Nenhuma das Partes Contratantes adoptará medidas que privem, directa ou indirectamente, os investidores da outra Parte Contratante dos investimentos por eles realizados, excepto quando observadas as seguintes condições:
 - a) As medidas sejam adoptadas por razões de utilidade pública ou interesse nacional, nos termos da legislação em vigor;
 - b) As medidas não revistam carácter discriminatório;

c) As medidas sejam acompanhadas de disposições que garantam o pagamento de uma indemnização imediata, adequada e efectiva; esta indemnização deverá ter por base o valor de mercado dos investimentos em causa num momento imediatamente anterior àquele em que a medida foi tornada pública; a indemnização vencerá juros à taxa de câmbio aplicável na data da efectivação da operação, no território onde se situa o investimento; a legalidade das medidas referidas e o montante da indemnização poderão ser sujeitos a revisão por meio do procedimento legal aplicável.

ARTIGO 5º

1. Cada Parte Contratante, em conformidade com a sua legislação, garante aos investidores da outra Parte Contratante a transferência, livre e sem demora, das importâncias relacionadas com os investimentos, nomeadamente:

- a) Do capital e das importâncias adicionais para a manutenção ou ampliação do investimento;
- b) Dos rendimentos;
- c) Das importâncias necessárias para o serviço e reembolso dos empréstimos, que ambas as Partes hajam reconhecido como investimento;
- d) Do produto resultante da liquidação ou alienação total ou parcial do investimento;
- e) Das indemnizações e outros pagamentos previstos no Artº 4º do presente Acordo;

- f) De quaisquer pagamentos que devam ser efectuados por força da sub-rogação prevista no Artº 6º do presente Acordo.
2. Para efeitos deste artigo, entender-se-á que uma transferência foi realizada "sem demora" quando a mesma for efectuada dentro do prazo normalmente necessário para o cumprimento das respectivas formalidades. O prazo será contado a partir do dia em que o devido requerimento, acompanhado dos necessários documentos, tenha sido apresentado, não podendo em caso algum exceder um mês.

ARTIGO 6º

No caso de uma das Partes Contratantes ou agência por ela designada ter concedido um seguro contra riscos não-comerciais a investimentos realizados por investidores dessa Parte Contratante no território da outra e tenha efectuado o pagamento correspondente ao seguro concedido, esta última reconhecerá à primeira a sub-rogação em todos os direitos do titular originário.

ARTIGO 7º

1. Os diferendos surgidos entre as Partes Contratantes relativos à interpretação e aplicação do presente Acordo deverão ser, na medida do possível, dirimidos por via diplomática.
2. Caso não se chegue a um entendimento no prazo de seis (6) meses a contar da data da notificação do diferendo, qualquer das Partes Contratantes poderá submetê-lo a um Tribunal de Arbitragem ad-hoc, em conformidade com as disposições deste Artigo.
3. O Tribunal Arbitral será constituído da seguinte forma: dentro do prazo de dois meses contado da data do recebimento do pedido de

arbitragem, cada Parte Contratante designará um árbitro. Esses dois árbitros, por sua vez, escolherão como Presidente um nacional de um terceiro Estado. O Presidente deverá ser designado no prazo de três (3) meses, contado da data de designação dos dois outros árbitros.

4. Se as necessárias nomeações não tiverem sido efectuadas dentro dos prazos fixados no parágrafo 3 deste Artigo, qualquer das Partes Contratantes pode, na ausência de outro acordo, solicitar ao Presidente do Tribunal Internacional de Justiça que proceda às necessárias nomeações.

Se o Presidente estiver impedido ou for nacional de uma das Partes Contratantes, as nomeações caberão ao Vice-Presidente.

Se este também estiver impedido ou for nacional de uma das Partes Contratantes, as nomeações caberão ao membro do Tribunal Internacional de Justiça que se siga na hierarquia desde que não seja nacional de qualquer das Partes Contratantes.

5. O Presidente do Tribunal Arbitral deverá ser nacional de um Estado com o qual ambas as Partes Contratantes mantenham relações diplomáticas.

6. O Tribunal Arbitral decidirá com base nas disposições deste Acordo e nas regras e princípios gerais de Direito Internacional. O Tribunal decidirá por maioria de votos e as suas decisões serão definitivas e obrigatórias para ambas as Partes Contratantes. O Tribunal Arbitral determinará as suas próprias regras processuais.

7. Cada uma das Partes Contratantes arcará com as despesas do respectivo árbitro, bem como com as relativas à sua representação no processo arbitral. As despesas do Presidente e os demais custos do processo serão igualmente repartidos pelas Partes Contratantes.

ARTIGO 8º

- 1. Os** diferendos respeitantes à aplicação do presente Acordo, surgidos entre uma das Partes Contratantes e um investidor da outra Parte Contratante que tenha realizado investimentos no território da primeira são, na medida do possível, solucionados por meio de consultas amistosas.
- 2. Se** o diferendo não puder ser resolvido de forma amigável no prazo de seis (6) meses, contado a partir do início de tais consultas, poderá ser submetido, à eleição do investidor:
 - a)** aos tribunais locais da Parte Contratante em cujo território se efectuou o investimento; ou
 - b)** à arbitragem do "Centro Internacional para Solução de Diferendos relativos a Investimentos" (CIRDI), estabelecido pela Convenção de Washington de 18 de Março de 1965, caso ambas as Partes Contratantes a ela tenham aderido, ou em conformidade com as regras que regem o Mecanismo Complementar de Procedimento de Conciliação, Arbitragem e Comprovação de factos administrado pelo Secretariado do CIRDI.
- Se,** por qualquer motivo, não estiverem disponíveis o CIRDI nem o Mecanismo Complementar, a arbitragem reger-se-á pelas regras de Arbitragem da Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional (UNCITRAL).
- 3. O** Tribunal Arbitral decidirá com base nas disposições deste Acordo, nas regras e princípios do Direito Internacional sobre a matéria, no direito da Parte Contratante em cujo território se efectuou o investimento e nos termos de eventuais acordos particulares que digam respeito ao investimento.

4. As sentenças arbitrais serão definitivas e obrigatórias para as partes em litígio e serão executadas em conformidade com a lei interna da Parte Contratante em cujo território o investimento tiver sido efectuado.
5. Em qualquer caso a sentença arbitral limitar-se-á a determinar se a Parte Contratante em causa não cumpriu alguma obrigação estabelecida no presente Acordo, se tal incumprimento causou danos ao investidor e, em caso afirmativo, a soma que deverá pagar a Parte Contratante ao investidor como indemnização desses danos.
6. As Partes Contratantes abster-se-ão de tratar, por meio de canais diplomáticos, de questões relativas a diferendos submetidos a processo judicial ou à arbitragem internacional, até que os processos correspondentes estejam concluídos, salvo no caso em que uma das partes no diferendo não tenha dado cumprimento à sentença judicial ou à decisão do Tribunal Arbitral, nos termos estabelecidos na respectiva sentença ou decisão.

ARTIGO 9º

Os representantes das Partes Contratantes deverão, sempre que necessário, realizar reuniões sobre qualquer matéria relacionada com a aplicação deste Acordo. Estas reuniões serão realizadas sob proposta de uma das Partes Contratantes, em lugar e data a acordar por via diplomática.

ARTIGO 10º

Se as disposições de outro Acordo Internacional ao qual hajam aderido ou venham a aderir as duas Partes Contratantes ou a regulamentação interna de qualquer das Partes estabelecer um

regime mais favorável do que o previsto no presente Acordo, prevalecerá sobre este o regime mais favorável.

ARTIGO 11º

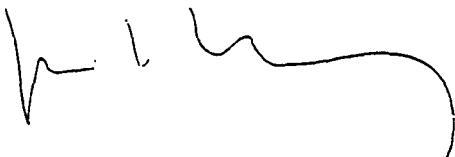
1. O presente Acordo aplicar-se-á a todos os investimentos já realizados por investidores de uma Parte Contratante no território da outra Parte Contratante em conformidade com as respectivas disposições legais.
2. O presente Acordo não se aplica a diferendos resultantes de actos e factos ocorridos antes da sua vigência.

ARTIGO 12º

1. Cada Parte Contratante notificará a outra sobre o cumprimento dos respectivos requisitos constitucionais necessários à entrada em vigor deste Acordo, a qual se dará trinta (30) dias após a data do recebimento da segunda notificação.
2. O presente Acordo permanecerá em vigor por um período inicial de dez (10) anos, após o que será tacitamente prorrogado por períodos sucessivos de cinco (5) anos.
3. O presente Acordo poderá ser denunciado por qualquer das Partes Contratantes, mediante notificação por escrito encaminhada por via diplomática, até um ano antes da respectiva data de expiração.
4. No caso de denúncia, as disposições previstas nos artigos de 1 a 11 do presente Acordo continuarão a aplicar-se, por um período de cinco (5) anos, a todos os investimentos realizados antes da sua notificação.

Feito em Caracas , aos dezassete dias do mês de junho de mil novecentos e noventa e quatro, em dois exemplares originais, nas línguas portuguesa e espanhola, sendo ambos os textos igualmente autênticos.

Pelo Governo
da República Portuguesa:



Pelo Governo
da República da Venezuela:



PROTOCOLO

Por ocasião da assinatura do Acordo sobre Promoção e Protecção Mútua de Investimentos entre a República Portuguesa e a República da Venezuela, os plenipotenciários abaixo assinados acordaram ainda nas seguintes disposições, que constituem parte integrante do referido Acordo:

1. Com referência ao Artigo 2º do presente Acordo:

Quando um investidor de uma das Partes Contratantes tenha efectuado investimentos no território da outra Parte Contratante e deseje ampliar ou desenvolver as suas actividades nouros sectores, esses investimentos serão considerados como novos investimentos e, como tal, estão sujeitos às regras que regulam a admissão dos investimentos, nos termos do artigo 2º do presente Acordo.

2. Com respeito ao artigo 3º do presente Acordo:

As Partes Contratantes consideram que as disposições do Artigo 3º do presente Acordo não prejudicam o direito de cada uma das Partes Contratantes de aplicar as disposições pertinentes do seu direito fiscal que estabeleçam uma distinção entre contribuintes que não se encontram em idêntica situação no que se refere ao seu lugar de residência ou ao lugar em que o seu capital é investido.

Feito em *Caracas*, aos *dezassete* dias do mês de *junho* do
ano de 1994, em dois exemplares originais, nas línguas portuguesa e
espanhola, sendo ambos os textos igualmente autênticos.

Pelo Governo
da República Portuguesa:



Pelo Governo
da República da Venezuela:



[TRANSLATION — TRADUCTION]

**AGREEMENT¹ BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF VENEZUELA AND THE GOVERNMENT OF THE PORTU-
GUESE REPUBLIC ON THE RECIPROCAL PROMOTION AND
PROTECTION OF INVESTMENTS**

The Government of the Republic of Venezuela and the Government of the Portuguese Republic, hereinafter referred to as "the Contracting Parties",

Desiring to intensify economic cooperation between the two States for their mutual benefit and to maintain fair and equitable conditions for investments by investors of each Contracting Party in the territory of the other Contracting Party,

Considering that the reciprocal promotion and protection of investments will contribute to the economic prosperity of the two States,

Have agreed as follows:

Article I

For the purposes of this Agreement:

1. The term "investor" shall mean:

(a) Individuals who, under the legislation of the Contracting Party concerned, are nationals of that Contracting Party;

(b) Legal entities, including commercial companies and other companies or associations, which have their main office in one of the Contracting Parties and are constituted and operate under the laws of that Contracting Party.

2. The term "investments" shall include all kinds of assets and rights related to investments made in accordance with the legislation of the other Contracting Party and includes in particular, but not exclusively:

(a) Movable and immovable property, as well as any other rights *in rem* of enjoyment and guarantee, whether or not inherent in the ownership of such assets, in particular mortgages and pledges;

(b) Shares and other forms of interest in the capital or economic earnings of companies;

(c) Claims to sums of money or to any other benefit having economic value;

(d) Intellectual property rights, including copyrights and industrial property rights (such as patents, technical processes, trade marks, trade names, industrial designs, and also know-how, logo and name of the establishment, goodwill and clientele);

(e) Concessions under public or private law, including concessions to prospect for, explore and develop natural resources.

¹ Came into force on 7 October 1995 by notification, in accordance with article XII.

No change in the form in which the assets or rights have been invested or reinvested shall affect their status as investments, in accordance with this Agreement and based on the relevant legal provisions.

3. The term "territory" shall mean the territory of each Contracting Party as defined in the respective legislation, over which that Contracting Party exercises sovereignty, sovereign right or jurisdiction, in accordance with international law.

4. The term "income" shall mean the amounts generated by an investment, such as profits and dividends, interests, royalties and other forms of remuneration related to the investment, including any payment for technical or managerial assistance.

5. The term "liquidation of investments" shall mean the cessation of the investment in accordance with the procedures established by the legislation in force in the country where the investment was made.

Article II

1. Each Contracting Party shall promote investments by investors of the other Contracting Party in its territory and shall admit them in accordance with its legislation.

2. Each Contracting Party shall protect investments made in its territory in accordance with its laws and regulations by investors of the other Contracting Party and shall refrain from adopting arbitrary or discriminatory measures that impede the management, manufacture, use, usufruct, expansion, disposal and liquidation of their investments.

Article III

1. Each Contracting Party shall guarantee in its territory non-discriminatory, fair and equitable treatment in accordance with international law for investments made by investors of the other Contracting Party.

2. In matters governed by this Agreement, the treatment referred to in paragraph 1 of this article shall be no less favourable than that granted by either Contracting Party to investments made in its territory, under similar conditions, by its own investors or by those of a third country.

3. The provisions contained in paragraphs 1 and 2 of this article shall not affect the most favourable treatment in force or that which shall in the future be granted by one Contracting Party to investments of investors of third States by virtue of:

(a) Participation in customs unions, free trade areas or other similar forms of economic cooperation or regional integration;

(b) Agreements on the avoidance of double taxation or any other instrument relating to taxation.

Article IV

1. Neither Contracting Party shall adopt measures which directly or indirectly deprive investors of the other Contracting Party of the investments they have made, except in the following conditions:

(a) The measures are taken for reasons of public or national interest, under the terms of the legislation in force;

(b) The measures are not discriminatory;

(c) The measures are accompanied by provisions guaranteeing the payment of immediate, adequate and effective compensation; such compensation shall be based on the market value of the investments concerned immediately before the measures were made public; the compensation shall earn interest at the exchange rate applicable on the date on which the operation is carried out, in the territory where the investment is situated; the legality of the measures referred to and the amount of the compensation may be subject to review through the applicable legal procedure.

Article V

1. Each Contracting Party shall, subject to its legislation, guarantee to investors of the other Contracting Party the free transfer without delay of amounts related to the investments, in particular:

(a) The capital and additional amounts for the maintenance or expansion of the investment;

(b) Income;

(c) Amounts required for the servicing or repayment of loans which both Parties have recognized as investments;

(d) The proceeds from the liquidation or total or partial disposal of the investment;

(e) Compensation and other payments contemplated in article IV of this Agreement;

(f) Any payment to be made by virtue of the subrogation contemplated in article VI of this Agreement.

2. For the purposes of this article, a transfer shall be considered to have been effected "without delay" if it has been effected within the period of time normally needed for the completion of the respective formalities. The period shall start to run on the date on which the appropriate request, accompanied by the necessary documents, was submitted and may in no case exceed one (1) month.

Article VI

If one of the Contracting Parties or an entity designated by it has provided insurance against non-commercial risks to investments made by investors of that Contracting Party in the territory of the other, and has made the payment corresponding to the insurance provided, the latter Contracting Party shall recognize the subrogation of the former with regard to all the rights of the original titleholder.

Article VII

1. Any disputes which arise between the Contracting Parties concerning the interpretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be resolved through the diplomatic channel.

2. If no agreement is reached within a period of six (6) months following the date of notification of the dispute, either of the Contracting Parties may refer it to an *ad hoc* arbitral tribunal, in accordance with the provisions of this article.

3. The arbitral tribunal shall be constituted in the following manner. Within a period of two months from the date of receipt of the request for arbitration, each

Contracting Party shall appoint an arbitrator. These two arbitrators shall, in turn, choose as chairman a national of a third State. The chairman shall be appointed within a period of three (3) months from the date of the appointment of the other two arbitrators.

4. If the required appointments are not made within the time limits set in paragraph 3 of this article, either of the Contracting Parties may, unless otherwise agreed, invite the President of the International Court of Justice to make the said appointments. If the President is unable to act or is a national of one of the Contracting Parties, the appointments shall be made by the Vice-President. If he is also unable to act or is a national of one of the Contracting Parties, the appointments shall be made by the next-ranking member of the Court who is not a national of either of the Contracting Parties.

5. The chairman of the arbitral tribunal shall be a national of a State with which both Contracting Parties have diplomatic relations.

6. The arbitral tribunal shall base its decisions on the provisions of this Agreement and the rules and principles of international law. The tribunal shall take its decisions by a majority vote and its decisions shall be final and binding on both Contracting Parties. The arbitral tribunal shall adopt its own rules of procedure.

7. Each Contracting Party shall bear the costs of its own arbitrator and those relating to its representation in the arbitral proceedings. The costs of the chairman and other costs of the proceedings shall be borne equally by the Contracting Parties.

Article VIII

1. Any disputes concerning the application of this Agreement which may arise between one of the Contracting Parties and an investor of the other Contracting Party who has made investments in the territory of the former shall, as far as possible, be resolved by friendly consultations.

2. If the dispute cannot be resolved amicably within a period of six (6) months from the start of such consultations, it may be referred, at the choice of the investor:

(a) To the local tribunals of the Contracting Party in whose territory the investment was made; or

(b) To arbitration by the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) established by the Washington Convention of 18 March 1965,¹ if both Contracting Parties are parties to it, or, if necessary, to the rules that govern the Additional Facility for the Administration of Conciliation, Arbitration and Fact-Finding Proceedings by the Secretariat of ICSID. If, for any reason, neither ICSID nor the Additional Facility is available, the arbitration shall be governed by the Rules of Arbitration of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).²

3. The arbitral tribunal shall base its decision on the provisions of this Agreement, the relevant rules and principles of international law, the legislation of the Contracting Party in whose territory the investment was made and the terms of any specific agreements relating to the investment.

¹ United Nations, *Treaty Series*, vol. 575, p. 159.

² United Nations, *Official Records of the General Assembly, Thirty-first Session, Supplement No. 17 (A/31/17)*, p. 34.

4. The arbitral decisions shall be final and binding on the parties to the dispute and shall be enforced in accordance with the domestic legislation of the Contracting Party in whose territory the investment was made.

5. In any case, the arbitral decision shall be limited to determining whether the Contracting Party in question failed to comply with any obligation established in this Agreement, whether such non-compliance caused damage to the investor and, if so, how much the Contracting Party should pay to the investor as compensation for both damages.

6. The Contracting Parties shall refrain from dealing through the diplomatic channel with matters relating to disputes referred to judicial process or international arbitration, until the corresponding proceedings have been concluded, except when one of the parties to the dispute has not complied with the legal ruling or decision of the arbitral tribunal, in the terms established in the respective ruling or decision.

Article IX

Representatives of the Contracting Parties shall, whenever necessary, hold meetings on any matter relating to the application of this Agreement. Such meetings shall be held at the suggestion of either Contracting Party, in the place and on the date agreed through the diplomatic channel.

Article X

If the provisions of another international agreement to which the two Contracting Parties are or will be party, or those of the domestic regulations of either of the Contracting Parties, establish more favourable arrangements than those contemplated in this Agreement, the more favourable arrangements shall prevail over the Agreement.

Article XI

1. This Agreement shall apply to all investments already made by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party in accordance with the relevant legal provisions.

2. This Agreement shall not apply to disputes resulting from facts or acts which predate its entry into force.

Article XII

1. Each Contracting Party shall notify the other Contracting Party of the completion of the respective constitutional requirements necessary for the entry into force of this Agreement, which shall take place thirty (30) days after the date of receipt of the second notification.

2. This Agreement shall remain in force for an initial period of ten (10) years, after which it shall be tacitly extended for successive periods of five (5) years.

3. This Agreement may be denounced by either of the Contracting Parties by written notification through the diplomatic channel no less than one year before the relevant date of expiry.

4. Should the Agreement be denounced, the provisions stipulated in articles 1 to 11 of this Agreement shall continue to apply for a period of five (5) years to all investments made before the notification.

DONE at Caracas on the seventeenth day of June nineteen hundred and ninety-four, in two originals in Spanish and Portuguese, both texts being equally authentic.

For the Government
of the Republic of Venezuela:

MIGUEL ANGEL BURELLI RIVAS
Minister for Foreign Affairs

For the Government
of the Portuguese Republic:

JOSÉ DURAO BARROSO
Minister for Foreign Affairs

PROTOCOL

Upon signature of the Agreement on the Reciprocal Promotion and Protection of Investments between the Republic of Venezuela and the Portuguese Republic, the undersigned plenipotentiaries also agreed on the following provisions, which form an integral part of the Agreement:

1. *With regard to article 2:*

When an investor of one of the Contracting Parties has made investments in the territory of the other Contracting Party and wishes to expand or develop activities in other sectors, such investments shall be considered as new investments and shall therefore be subject to the rules on admission of investments in accordance with article 2 of this Agreement.

2. *With regard to article 3:*

The Contracting Parties consider that the provisions of article 3 of this Agreement shall not affect the right of each Contracting Party to apply the relevant provisions of its tax laws which distinguish between tax-payers who are not in the same situation as regards their place of residence or the place where the investment is situated.

DONE at Caracas on the seventeenth day of June nineteen hundred and ninety-four, in two originals in Spanish and Portuguese, both texts being equally authentic.

For the Government
of the Republic of Venezuela:

MIGUEL ANGEL BURELLI RIVAS
Minister for Foreign Affairs

For the Government
of the Portuguese Republic:

JOSÉ DURAO BARROSO
Minister for Foreign Affairs

[TRADUCTION — TRANSLATION]

ACCORD¹ ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU VENEZUELA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE RELATIF À LA PROMOTION ET À LA PROTECTION RÉCIPROQUES DES INVESTISSEMENTS

Le Gouvernement de la République du Venezuela et le Gouvernement de la République portugaise, ci-après dénommés les « Parties contractantes »,

Désirant intensifier la coopération économique entre les deux Etats à leur avantage mutuel et assurer des conditions justes et équitables pour les investissements d'investisseurs de chaque Partie contractante sur le territoire de l'autre,

Considérant que la promotion et la protection réciproques des investissements contribueront à accroître la prospérité des deux Etats,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Aux fins du présent Accord :

1. L'expression « investisseur » s'entend :

a) Des personnes physiques qui, conformément à la législation de la Partie contractante concernée, sont des ressortissants de cette Partie contractante;

b) Des personnes morales, y compris les sociétés commerciales et autres sociétés ou associations, qui ont leur siège sur le territoire d'une Partie contractante et sont constituées et fonctionnent conformément au droit de celle-ci.

2. L'expression « investissement » s'entend des biens et droits de toute nature en rapport avec des investissements réalisés conformément à la législation de l'autre Partie contractante et couvre en particulier — mais non exclusivement :

a) La propriété des biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels de jouissance ou de garantie, liés ou non à la propriété de ces biens, notamment hypothèques ou gages;

b) Les parts sociales et autres formes de participation au capital ou aux résultats économiques des sociétés;

c) Les créances pécuniaires ou portant sur une quelconque autre prestation à valeur économique;

d) Les droits de propriété intellectuelle, y compris droits d'auteur et droits de propriété industrielle (ainsi les brevets, procédés techniques, marques de fabrique ou de commerce, noms commerciaux et dessins industriels, de même que les savoir-faire, la signature et le nom de l'établissement, la renommée et la clientèle);

e) Les concessions de droit public ou de droit privé, y compris les concessions de prospection, d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles.

¹ Entré en vigueur le 7 octobre 1995 par notification, conformément à l'article XII.

Aucune modification du mode d'investissement ou de réinvestissement des biens et des droits n'affecte leur caractère d'investissement en vertu du présent Accord sur la base des dispositions légales pertinentes.

3. L'expression « territoire » s'entend du territoire de l'une ou l'autre Partie contractante, tel que défini dans leurs législations respectives, sur lequel la Partie contractante exerce, en conformité avec le droit international, une souveraineté, un droit souverain ou une juridiction.

4. L'expression « revenu » s'entend des produits d'un investissement, ainsi des gains et dividendes, intérêts, redevances et autres formes de rémunération en rapport avec l'investissement, y compris de tout paiement effectué en échange d'une assistance technique ou gestionnelle.

5. L'expression « liquidation des investissements » s'entend d'une cessation de l'investissement intervenant conformément aux procédures législatives en vigueur dans le pays où l'investissement a été effectué.

Article II

1. Chaque Partie contractante encourage, sur son territoire, les investissements effectués par des investisseurs de l'autre Partie contractante et les admet conformément à sa législation.

2. Chaque Partie contractante protège, sur son territoire, les investissements effectués conformément à ses lois et règlements par des investisseurs de l'autre Partie contractante et s'abstient d'entraver, par des mesures arbitraires ou discriminatoires, l'administration, la fabrication, l'utilisation, l'usufruit, l'augmentation, l'aliénation et la liquidation de ses investissements.

Article III

1. Chaque Partie contractante assure, sur son territoire, un traitement non discriminatoire, juste et équitable, conforme au droit international, des investissements effectués par des investisseurs de l'autre Partie contractante.

2. S'agissant des questions régies par le présent Accord, le traitement visé au paragraphe 1 du présent article est non moins favorable que celui accordé par la Partie contractante considérée aux investissements effectués sur son territoire, dans des conditions semblables, par ses propres ressortissants ou ceux d'un pays tiers.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article s'entendent sans préjudice du traitement plus favorable en vigueur ou pouvant être concédé à l'avenir par une Partie contractante aux investissements d'investisseurs d'Etats tiers en raison :

a) De la participation à des unions douanières, zones de libre-échange ou autres modes similaires de coopération économique ou d'intégration régionale;

b) D'accords visant à éviter la double imposition ou de tout autre instrument relatif à l'imposition.

Article IV

I. Aucune Partie contractante ne prend de mesures privant, directement ou indirectement, les investisseurs de l'autre Partie contractante des investissements effectués par ces derniers, sauf à observer les conditions suivantes :

- a) Les mesures sont prises pour cause d'utilité publique ou d'intérêt national, conformément aux clauses législatives en vigueur;
- b) Elles n'ont pas un caractère discriminatoire;
- c) Elles sont assorties de dispositions garantissant le versement d'une indemnité immédiate, adéquate et effective; l'indemnité doit être fondée sur la valeur marchande de l'investissement concerné immédiatement avant que la mesure ait été rendue publique; l'indemnité comporte les intérêts calculés en fonction du taux de change en vigueur à la date effective de l'opération sur le territoire où est situé l'investissement; la légalité des mesures visées et le montant de l'indemnisation peuvent faire l'objet d'un recours dans le cadre de la procédure légale applicable.

Article V

1. Chaque Partie contractante, conformément à sa législation, garantit aux investisseurs de l'autre Partie contractante la possibilité de transférer librement et sans retard les montants en rapport avec les investissements, en particulier :

- a) Capital et montants additionnels afférents au maintien et au développement de l'investissement;
- b) Revenus;
- c) Montants nécessaires au service ou au remboursement des prêts reconnus par les deux Parties en tant qu'investissements;
- d) Produit de la liquidation ou de l'aliénation totale ou partielle de l'investissement;
- e) Indemnisations et autres paiements prévus à l'article IV du présent Accord;
- f) Paiements quelconques à effectuer en vertu de la subrogation prévue à l'article VI du présent Accord.

2. Aux fins du présent article, le transfert est tenu pour réalisé « sans retard » quand il a lieu dans le délai normalement requis pour accomplir les formalités correspondantes. Le délai court à partir du jour de la présentation de la demande régulière accompagnée des documents nécessaires et ne peut en aucun cas excéder un (1) mois.

Article VI

Si l'une des Parties contractantes ou une entité désignée par elle a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux en rapport avec des investissements effectués par ses investisseurs sur le territoire de l'autre Partie contractante et si elle a fait le paiement correspondant à la garantie accordée, l'autre Partie contractante admet la subrogation de la première Partie contractante dans tous les droits du titulaire original.

Article VII

1. Les différends éventuels entre les Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord sont, dans la mesure du possible, réglés par la voie diplomatique.

2. A supposer qu'un accord ne puisse pas se faire dans le délai de six (6) mois à compter de la date de la notification du différend, l'une ou l'autre Partie contrac-

tante peut demander qu'il soit soumis à un tribunal arbitral *ad hoc*, conformément aux dispositions du présent article.

3. Le tribunal arbitral est constitué de la manière suivante; dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'arbitrage, chaque Partie contractante désigne un arbitre. Ces deux arbitres choisissent à leur tour comme Président un ressortissant d'un Etat tiers. Le Président doit être nommé dans le délai de trois (3) mois à compter de la date de la désignation des deux autres arbitres.

4. S'il n'est pas procédé aux désignations nécessaires dans les délais spécifiés au paragraphe 3 du présent article, l'une ou l'autre Partie contractante peut, faute d'un autre arrangement, demander au Président de la Cour internationale de Justice de procéder à ces désignations. Au cas où le Président est empêché ou s'il est un ressortissant d'une Partie contractante, les désignations sont faites par le Vice-Président de la Cour. Si celui-ci est lui-même empêché ou s'il est un ressortissant d'une Partie contractante, les désignations sont faites par le membre de la Cour venant à sa suite dans l'ordre hiérarchique et qui n'est pas un ressortissant d'une Partie contractante.

5. Le Président du tribunal arbitral doit être ressortissant d'un Etat avec lequel les deux Parties contractantes entretiennent des relations diplomatiques.

6. Le tribunal arbitral rend sa décision sur la base des dispositions du présent Accord et des règles et principes du droit international. Il prend ses décisions à la majorité des voix, et celles-ci sont définitives et obligatoires pour les deux Parties contractantes. Il arrête sa propre procédure.

7. Chaque Partie contractante prend à sa charge les frais afférents à son arbitre et les frais de sa représentation dans la procédure arbitrale. Les frais du Président et les autres frais de procédure sont pris en charge à parts égales par les Parties contractantes.

Article VIII

1. Les différends éventuels relatifs à l'application du présent Accord entre une des deux Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie contractante qui a effectué des investissements sur le territoire de la première Partie contractante sont, dans la mesure du possible, réglés par voie de consultations amiables.

2. Si le différend ne peut être réglé à l'amiable dans le délai de six (6) mois à compter de la date du début de ces consultations, il peut être soumis, au choix de l'investisseur :

a) Aux tribunaux locaux de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué;

b) A l'arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) établi par la Convention de Washington du 18 mars 1965¹; si les deux Parties contractantes sont parties à ladite Convention ou bien, éventuellement, aux règles applicables dans le cadre du Mécanisme supplémentaire pour l'administration des procédures de conciliation, d'arbitrage et de constatation des faits par le Secrétariat du CIRDI. Dans le cas où, pour un motif quelconque, ni le CIRDI ni le Mécanisme supplémentaire ne sont accessibles, l'arbitrage est régi par

¹ Nations Unies, *Recueil des Traité*, vol. 575, p. 159.

le Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI)¹.

3. Le tribunal arbitral rend sa décision sur la base des dispositions du présent Accord, des règles et principes du droit international en la matière, du droit de la Partie contractante sur le territoire de laquelle a été effectué l'investissement et des clauses des accords particuliers éventuellement conclus en rapport avec celui-ci.

4. Les sentences arbitrales sont définitives et obligatoires pour les parties au différend et sont exécutées conformément au droit interne de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué.

5. En tout état de cause, la sentence arbitrale se limite à déterminer si la Partie contractante concernée a manqué à quelque obligation prévue dans le présent Accord, si ce manquement a causé un dommage à l'investisseur et, dans l'affirmative, la somme que la Partie contractante doit payer à l'investisseur pour l'indemniser des dommages subis sur les deux plans.

6. Les Parties contractantes s'abstiennent de traiter par les voies diplomatiques les questions relatives à des différends soumis à un processus judiciaire ou arbitral international, cela jusqu'à conclusion des procédures correspondantes, à moins que l'une des parties au différend manque à se conformer à la décision judiciaire ou à la sentence arbitrale selon les clauses de la décision ou de la sentence.

Article IX

Les représentants des Parties contractantes doivent, dans la mesure où c'est nécessaire, organiser des réunions pour traiter de toute question relative à l'application du présent Accord. Ces réunions sont organisées sur proposition de l'une ou l'autre Partie contractante à l'endroit et à la date convenus par la voie diplomatique.

Article X

Si les dispositions d'un autre accord international auquel les deux Parties contractantes sont ou deviennent parties, ou bien les dispositions réglementaires internes de l'une ou l'autre Partie contractante établissent un régime plus favorable que celui prévu dans le présent Accord, le premier régime prévaut sur le second.

Article XI

1. Le présent Accord s'applique à tous les investissements déjà effectués par les investisseurs d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante conformément aux dispositions juridiques respectives.

2. Le présent Accord ne s'applique à aucun différend résultant de faits ou d'actes survenus avant son entrée en vigueur.

Article XII

1. Chaque Partie contractante notifiera à l'autre l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises de sa part aux fins de l'entrée en vigueur du présent Accord, laquelle aura lieu trente (30) jours après la date de la réception de la seconde notification.

¹ Nations Unies, *Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-et-unième session, Supplément no 17* (A/31/17), p. 36.

2. Le présent Accord restera en vigueur pour une période initiale de dix (10) ans, à l'expiration de laquelle il sera tacitement prorogé par périodes successives de cinq (5) ans.

3. Le présent Accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre Partie contractante, moyennant notification écrite effectuée par la voie diplomatique un an au moins avant la date d'expiration correspondante.

4. En cas de dénonciation, les dispositions des articles premier à XI du présent Accord continueront de s'appliquer pendant une période de cinq (5) ans à tous les investissements effectués avant la notification correspondante.

FAIT à Caracas le 17 juin 1994, en deux originaux en langues espagnole et portugaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République du Venezuela :

Le Ministre
des relations extérieures,
MIGUEL ANGEL BURELLI RIVAS

Pour le Gouvernement
de la République portugaise :

Le Ministre
des relations extérieures,
JOSÉ DURAO BARROSO

PROTOCOLE

Au moment de signer l'Accord relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements entre la République du Venezuela et la République portugaise, les plénipotentiaires soussignés sont additionnellement convenus des dispositions ci-après, qui font partie intégrante de l'Accord.

1. *En référence à l'article II :*

Dans le cas où un investisseur d'une Partie contractante a effectué des investissements sur le territoire de l'autre Partie contractante et souhaite augmenter ou développer ses activités dans d'autres secteurs, ces investissements sont considérés comme nouveaux et, en conséquence, sont soumis aux règles relatives à l'admission des investissements conformément à l'article II de l'Accord.

2. *En référence à l'article III :*

Les Parties contractantes considèrent que les dispositions de l'article III de l'Accord n'affectent pas le droit de chaque Partie contractante à appliquer les dispositions pertinentes de son droit fiscal qui établissent une distinction entre contribuables ne se trouvant pas dans la même situation du point de vue du lieu de résidence ou du lieu dans lequel est situé l'investissement.

FAIT à Caracas le 17 juin 1994, en deux originaux en langues espagnole et portugaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République du Venezuela :

Le Ministre
des relations extérieures,
MIGUEL ANGEL BURELLI RIVAS

Pour le Gouvernement
de la République portugaise :

Le Ministre
des relations extérieures,
JOSÉ DURAO BARROSO

